

---

## CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SOBRE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A JUZGADOS Y TRIBUNALES A TRAVÉS DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL

---

En Madrid, a (fecha).

### REUNIDOS:

De una parte, la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la Excm. Sra. Doña Maria Isabel Perelló Doménech, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial y en representación del Consejo General del Poder Judicial según la previsión del artículo 598.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

De otra, el Director General de la Marina Mercante, Ilmo. Sr. Gustavo Santana Hernández, según Real Decreto 1048/2023, de 7 de diciembre (BOE núm. 293, de 8 de diciembre de 2023), facultado para suscribir convenios que afecten a su ámbito funcional, según la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y delegación de competencias («BOE» núm. 230, de 25/09/2021).

Se reconocen con capacidad y legitimación bastante en derecho para celebrar y firmar el presente convenio de colaboración, y en su virtud,

### EXPONEN:

**PRIMERO.-** Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, los artículos 104.2 y 558 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y, según los artículos

585 y 598 de la LOPJ ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.

**SEGUNDO.-** Que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 20 de febrero de 2002, autorizó la constitución del "Punto Neutro Judicial", como una red de comunicaciones que se basa en una plataforma de servicios que permite consultar e interconectar a los órganos judiciales con terceras entidades como Administraciones públicas, Colegios Profesionales, Entidades Financieras o Registros. Su objeto consiste en mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos, ofreciendo para ello herramientas y servicios a los colectivos que conforman la justicia, para que puedan ser más eficientes y eficaces en la tramitación de los asuntos judiciales.

Los objetivos principales del Punto Neutro Judicial son servir de apoyo a la gestión de los órganos judiciales, proporcionar servicios de ayuda al juez/a, automatizar la gestión de los órganos de gobierno y facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre los servicios informáticos al servicio de la Administración de Justicia.

**TERCERO.-** Que para la articulación del Punto Neutro Judicial se han firmado convenios con aquellas entidades que permiten, en el marco de la actuación judicial, acceder a sus bases de datos, regulando la forma y utilización de este acceso, facilitando la realización de las actuaciones judiciales a través de esta red de comunicaciones y la plataforma que incorpora, siempre previa resolución procesal que lo autorice.

A su vez, por razones de eficiencia y eficacia, y para evitar que todos los convenios individuales tuviesen que ser firmados, además de por la entidad pública correspondiente, por el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y Fiscalía General del Estado, se ha tramitado con todos ellos el Convenio Marco para la utilización de la plataforma de servicios del punto neutro judicial, de fecha 5 de octubre de 2022, donde se recogen los compromisos de todos ellos en relación con el acceso a las bases de datos que se pueden consultar a través del Punto Neutro Judicial y a la información que puede suministrarse a través del mismo, así como en relación con la práctica de actuaciones procesales por medio de esta red de comunicaciones y la plataforma que incorpora. Se adjunta dicho Convenio marco como anexo I

Asimismo, se ha firmado un Acuerdo de Colaboración con la Fiscalía Europea sobre la utilización del Punto Neutro Judicial, cuyo objeto consiste en establecer el marco de colaboración entre ambas partes en relación con el acceso a esta plataforma cuando la Fiscalía Europea en España ejerza

funciones respecto de las cuales la ley la autorice a obtener información de las bases de datos de las Administraciones y Organismos que a su vez hayan convenido con el CGPJ. Se adjunta dicho Acuerdo de colaboración como Anexo II.

**CUARTO.-** Que, de conformidad con el artículo 65.2. de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, la matrícula de un buque o embarcación corresponde a la Administración Marítima a través del Registro de Buques y Empresas Navieras y va destinada a mantener la identificación y control administrativo de los buques y embarcaciones españoles. El Registro de Buques y de Empresas Navieras y el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras se registrarán por lo establecido en esta ley y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como en los reglamentos correspondientes.

En este sentido, el artículo 251 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, establece que el Registro de Buques y Empresas Navieras es un registro público de carácter administrativo que tiene por objeto la inscripción de buques abanderados en España y de las empresas navieras españolas, y que en la inscripción de los buques se hará constar, a efectos de su identificación, todas sus circunstancias esenciales y sus modificaciones, así como los actos y contratos por los que se adquiera o transmita su propiedad, los de constitución de hipotecas o imposición de derechos reales y cualquier otro extremo que se determine legal o reglamentariamente.

Por otro lado, la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, regula un Registro Especial de buques y empresas navieras situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, de carácter público y administrativo, cuya gestión y administración se realiza a través de dos oficinas de gestión incardinadas en las Capitanías Marítimas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y en el que pueden inscribirse las empresas navieras siempre que tengan en Canarias el centro efectivo de control de la explotación de los buques o, teniéndolo en otro lugar, cuenten con un establecimiento o representación permanente en Canarias.

Asimismo, los artículos 8 y 9 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre Abanderamiento, Matriculación de Buques y Registro Marítimo, establecen la llevanza en la Dirección General de la Marina Mercante de un Registro Marítimo Central de todos los buques, en el que se incorporan todos sus datos, necesarios para conocer todas las posibilidades de su utilización,

así como para poder informar debidamente y proponer la resolución que proceda en las peticiones de cambio de titularidad, dominio: nombre y lista; exportación, desguace, pérdida total por accidente y, en general, cuantas incidencias administrativas puedan ocurrir al buque desde su entrada en servicio hasta su baja del registro. Igualmente, dicho Real Decreto 1027/1989 dispone en su artículo 10 que compete también a la Dirección General de la Marina Mercante la llevanza de un Registro de Empresas Marítimas, constituido por tres secciones, en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas, así como los organismos de carácter público que sean propietarios o exploten buques o embarcaciones.

Esta normativa está siendo objeto de una actualización legislativa, que agrupará estos registros, además de otro más sobre buques y embarcaciones de recreo utilizados con fines comerciales, bajo la denominación de registros marítimos españoles, cuyo contenido no diferirá de lo que hoy ya prevén las normas citadas.

**QUINTO.-** Que la Dirección General de la Marina Mercante al gestionar los citados registros de buques y de empresas es destinataria de un gran número de requerimientos de colaboración procedentes de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, consistentes en la comunicación de información sobre la titularidad de buques y embarcaciones, así como del contenido de las anotaciones que consten en la hoja de asiento de esas embarcaciones y buques.

**SEXTO.-** Que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP).

En este sentido, por razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias justifican el establecimiento de un sistema de suministro de información a los órganos judiciales disponer de la información que precisa para el ejercicio de sus funciones de forma ágil, mediante la utilización de los medios materiales y humanos ya existentes en ambas Administraciones públicas y, por tanto, sin que la aplicación del presente convenio implique aumento de costes para ninguna de ellas.

En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

**SÉPTIMO.-** Que según establece el artículo 48 de la LRJSP, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas entidades y organismos públicos.

En consecuencia y atendiendo a todo cuanto se acaba de exponer, las dos partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficioso para ambas la colaboración en distintas materias de su competencia, acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes

## CLÁUSULAS

### PRIMERA.- Objeto del convenio.

El objeto del presente convenio consiste en la realización de una serie de actuaciones que permitan que exista un procedimiento electrónico mediante el cual los juzgados y tribunales y fiscalías puedan acceder en el ejercicio de sus funciones a información que se encuentre incorporada en los registros marítimos españoles, atendiendo también al Convenio Marco entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General del Estado para la utilización de la plataforma del punto neutro judicial.

Asimismo, y en virtud del Acuerdo de colaboración entre el CGPJ y la Fiscalía Europea, para la utilización de la plataforma de servicios punto neutro



judicial, hecho en Madrid y Luxemburgo el 2 de febrero de 2022, el cual se adjunta como anexo, se dará también acceso, siguiendo igual procedimiento y cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones a la Fiscalía Europea.

## **SEGUNDA.- Procedimiento de acceso a la información.**

El acceso a la información contenida en los registros de buques y empresas navieras se realizará en los siguientes términos:

- 1.º Se llevará a cabo de manera directa y por medios telemáticos, en tiempo real y a través de los sistemas corporativos del "Punto Neutro Judicial".
- 2.º Estará justificado por su necesidad para el ejercicio de las competencias de los juzgados, tribunales y fiscalías y en el marco del procedimiento judicial correspondiente, previa resolución procesal que lo autorice.
- 3.º Los datos de los registros de buques y de empresas navieras se referirán a la titularidad, identificación de los buques y embarcaciones pertenecientes a una persona física o jurídica e información relevante que conste en la hoja de asiento.

En caso de retraso en la implementación de un servicio web de comunicación que de acceso a los datos contenidos en los registros de buques gestionado por la Dirección General de la Marina Mercante a través del "Punto Neutro Judicial", o de fallo en el sistema, de forma temporal, el acceso a los datos requeridos se producirá a través de la Plataforma de servicios del PNJ por parte del personal encargado de la gestión de los registros de buques de la Dirección General de la Marina Mercante.

## **TERCERA.- Compromisos de las partes.**

Para el efectivo funcionamiento de este convenio y conseguir los objetivos descritos en el mismo las partes firmantes se comprometen:

1. Por parte del Consejo General del Poder Judicial:
  - a. Facilitará la conexión de las redes de comunicaciones de la Dirección General de la Marina Mercante al "Punto Neutro Judicial";
  - b. Será responsable de la gestión de los usuarios que accedan al Servicio Web de petición de información de la Dirección General

de General de la Marina Mercante, siendo competente para determinar el personal facultado y condiciones de acceso, proporcionar la documentación necesaria, registrar las incidencias que se puedan producir y adoptar las medidas que garanticen el correcto uso de los datos;

- c. Facilitará el asesoramiento técnico e informático a los distintos usuarios, en coordinación con la Dirección General de la Marina Mercante;
- d. Promoverá la utilización de este medio como único para acceder por los Juzgados y Tribunales a los datos indicados en este convenio.

2. Por parte de la Dirección General de la Marina Mercante:

- a. Garantizar el acceso a la información a la que se ha hecho referencia anteriormente;
- b. Facilitar el asesoramiento técnico e informático preciso para la prestación del servicio.

#### **CUARTA.- Financiación.**

El presente convenio no dará lugar a contraprestaciones económicas entre las partes que lo suscriben, ni generará ningún gasto.

#### **QUINTA.- Protección de datos.**

Los datos personales que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven de su ejecución, serán incorporados a las actividades de tratamiento responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, así como Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación y oposición a su tratamiento, cuando procedan, en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento, o en las direcciones de los organismos firmantes.

En cuanto a los datos personales que se deriven del acceso a la información y que facilite la Dirección General de la Marina Mercante, atendiendo a lo establecido en el artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, tendrán el carácter de jurisdiccionales.

#### **SEXTA. – Confidencialidad.**

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de la normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

#### **SÉPTIMA.- Comisión mixta de seguimiento.**

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una comisión mixta de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes.

La comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.



La comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente convenio y ejercerá las siguientes funciones:

- a) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente convenio.
- b) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente convenio.
- c) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
- d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del convenio.
- e) Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Esta comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 f) de la LRJSP, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.c) y 52.3 de la mencionada ley.

#### **OCTAVA.- Vigencia y eficacia del convenio.**

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y mantendrá su vigencia por un periodo de cuatro años. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» de acuerdo con lo establecido en el art. 48.8 de la LRJSP.

Este convenio, podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes por un periodo de hasta cuatro años adicionales, siempre que la prórroga se formalice antes de la extinción del convenio. Transcurridos estos ocho años el convenio quedará extinto y en caso de que se quisiese seguir con los compromisos de este convenio será necesario suscribir uno nuevo.

#### **NOVENA.- Modificación, suspensión, resolución y extinción del convenio.**

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas autoridades que el presente convenio.

En el caso de que alguna de las partes detecte incumplimientos generalizados de las obligaciones de los usuarios o accesos irregulares o no autorizados que fuesen masivos, la comisión mixta podrá acordar la suspensión de la vigencia del convenio. Con carácter previo, se iniciarán las oportunas comprobaciones tendentes a constatar las circunstancias en las que se hayan producido los hechos de que se trate y a remover los obstáculos que pudieran impedir su normal funcionamiento, previa puesta en conocimiento de la comisión mixta de seguimiento, en la que se resolverá, en su caso, continuar con el convenio si se han adoptado las medidas necesarias, suspenderlo o proceder a su resolución el convenio.

Según el artículo 51 de la LRJSP:

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
  - a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su prórroga.
  - b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
  - c) La denuncia del convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones suscritas.
  - d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

- e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del convenio.
- g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

La extinción anticipada no generará derechos indemnizatorios entre las partes.

La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la comisión mixta de seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la LRJSP.

### **DÉCIMA.- Régimen Jurídico.**

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, no posee carácter contractual y se rige por el Capítulo VI del Título Preliminar de la LRJSP.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la comisión mixta de seguimiento, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio en el lugar y la fecha indicados *ut supra*.

La Presidenta del Consejo General  
del Poder Judicial

El Director General de la Marina  
Mercante

*Maria Isabel Perelló Doménech*

*Gustavo Santana Hernández*

## ANEXO I

CONVENIO MARCO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL.

En Madrid,

REUNIDOS:

El Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, Don José Luis Benito y Benítez de Lugo, nombrado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de marzo de 2019 (BOE 30 marzo de 2019), en representación del mismo, en uso de la delegación de firma efectuada por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mediante Acuerdo de fecha de 21 de mayo de 2021.

El Secretario de Estado de Justicia, Don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo nombrado en virtud del Real Decreto 1088/2021, de 7 de diciembre, actuando en representación del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Subsecretaria de Defensa, D<sup>a</sup> Adoración Mateos Tejada, nombrada por Real Decreto 361/2022, de 10 de mayo (BOE núm. 112, de 11 de mayo de 2022), actuando en virtud de las facultades concedidas en el apartado primero c) de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de noviembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de colaboración.

El Fiscal General del Estado, el Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz, nombrado en virtud del Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto, y, en el ejercicio de la representación del Ministerio Fiscal. Órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, según se recoge en la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica el art. 22.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se reconocen con capacidad y legitimación bastante en derecho para celebrar y firmar el presente Convenio, y en su virtud,

EXPONEN:

PRIMERO.- Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y gobierno del Poder Judicial.

SEGUNDO.- Que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 20 de febrero de 2002, autorizó la constitución del "Punto Neutro Judicial", como una red de comunicaciones que soporta una plataforma de servicios que permite consultar e interconectar a los órganos judiciales con terceras entidades como Administraciones públicas, Colegios Profesionales, Entidades Financieras o Registros, al objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos ofreciendo para ello herramientas y servicios a los colectivos que conforman la justicia, para que puedan ser más eficientes y eficaces en la tramitación de los asuntos judiciales.

Los objetivos principales del Punto Neutro Judicial son servir de apoyo a la gestión de los órganos judiciales, proporcionar servicios de ayuda al juez/a, automatizar la gestión de los órganos de gobierno y facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre los servicios informáticos al servicio de la Administración de Justicia.

TERCERO.- Que para permitir esta conexión con las entidades referidas anteriormente se han firmado con todos ellos Convenios de Colaboración, que regulan la forma y utilización del acceso a las bases de datos que sean necesarias consultar durante el procedimiento judicial que se esté sustanciando. En todo caso, la consulta se realizará previa resolución judicial que lo autorice.

Respecto al catálogo de servicios convenidos a los que se puede acceder, cabe señalar, entre otros, las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico, Bancos y Cajas de Ahorro.

CUARTO.- Que el Punto Neutro Judicial, al facilitar que las comunicaciones se realicen de forma electrónica, contribuye a hacer efectivo el mandato del artículo 230.1 de la LOPJ, en virtud del cual, los Juzgados y Tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos,

informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen el capítulo I bis del Título III de la LOPJ, así como la normativa de protección de datos.

Además, también permite el cumplimiento de lo establecido por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que exige la interoperabilidad de los programas y servicios utilizados en el ámbito judicial.

QUINTO.- Conforme establecen los artículos 1 y 2 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia es el Departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la coordinación y colaboración con la administración de las comunidades autónomas al servicio de la justicia así como la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en su modernización, siendo responsable de la gestión del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia.

En consecuencia, es necesaria su intervención en este Convenio, que tiene por objeto la utilización de la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial por todos los órganos judiciales del territorio nacional.

SEXTO.- Conforme establece el artículo 8.2.g) del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Defensa corresponde la función de mantener las relaciones con los órganos de la jurisdicción militar en orden a la provisión de medios y a la ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que también se precisa que la persona de dicho Centro Directivo firme este Convenio para que en el ámbito de esa Jurisdicción se pueda utilizar el Punto Neutro Judicial.

SÉPTIMO.- Que el Ministerio Fiscal, conforme lo define la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y tiene encomendada, entre otras funciones, la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, para lo que podrá requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes, y que en el ejercicio de estas funciones, previa la correspondiente resolución habilitadora, también precisa utilizar el Punto Neutro Judicial, y por consiguiente, firmar este Convenio.



OCTAVO. - Que con anterioridad, el Consejo General del Poder Judicial ha firmado Convenios de Colaboración con todos ellos, cuya finalidad consistía en facilitar el acceso a la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial. En este sentido, las partes consideran necesaria su modificación para adecuarlos a la legislación vigente, en aras a mantener e impulsar estas líneas de colaboración entre todas las instituciones firmantes del presente Convenio.

NOVENO.- Que las partes consideran adecuado suscribir un Convenio que sustituya los anteriormente firmados de forma individual y que comprometa a todas ellas en la utilización de la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial, en el ejercicio de sus correspondientes competencias, que se registrá por las siguientes:

## CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

Este Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración a desarrollar entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General del Estado para la utilización de la plataforma de servicios de Punto Neutro Judicial como medio electrónico para la obtención, por parte de los Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de la función jurisdiccional, así como de las Fiscalías, cuando ejerzan funciones respecto de las que la Ley lo autorice, de información obrante en las bases de datos de aquellas Administraciones y Organismos que, a su vez, hayan convenido con el Consejo General del Poder Judicial facilitar este acceso a través del citado Punto Neutro Judicial.

Todo ello, sin perjuicio de los intercambios de información que, en determinados casos, distintos de los regulados en este Convenio, puedan contemplarse en el ordenamiento jurídico.

SEGUNDA.- Procedimiento de acceso a la información.

La utilización del Punto Neutro Judicial con la finalidad de acceder a la información disponible en las bases de datos de las Administraciones y Organismos con los que se haya suscrito convenio de colaboración se ajustará a las siguientes reglas:

- a) Cuando la petición de acceso a la información sea realizada por Juzgados y Tribunales, requerirá la existencia de una previa resolución

procesal que autorice esta solicitud en el marco del correspondiente procedimiento judicial.

A este respecto, son resoluciones procesales las enumeradas en el artículo 206 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

b) Cuando sean los miembros del Ministerio Fiscal, o funcionarios de la Oficina Fiscal designados por el Fiscal Jefe, quienes procedan a realizar esta petición de información, deberán encontrarse también autorizados, puesto que será condición indispensable para el acceso que se haya dictado en el marco de un procedimiento, expediente o diligencias, de forma previa, una resolución por parte del órgano correspondiente del Ministerio Fiscal.

c) Cuando afecte a datos de carácter personal, la comunicación de la información que previamente se haya solicitado por el Juzgado o Tribunal o Fiscalía correspondiente se realizará de conformidad con la cláusula sexta de este Convenio.

d) Con carácter general, la comunicación de la información se llevará a cabo de forma automatizada a solicitud de persona autorizada, sin perjuicio de que en la configuración del Punto Neutro Judicial, atendiendo a las peculiaridades de diferentes Administraciones u Organismos, se habilite la posibilidad de que la respuesta obtenida no se realice de manera automatizada.

e) La obtención de información por parte de los órganos judiciales y las fiscalías se llevará a cabo a través de la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial gestionado por el Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de que, en un futuro, puedan utilizarse otros sistemas o redes de comunicaciones que resulten más eficaces, previa aprobación por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

f) En caso de que se detecten incumplimientos de las obligaciones de los usuarios o accesos irregulares o no autorizados, se iniciarán las oportunas comprobaciones tendentes a constatar las circunstancias en las que se hayan producido los hechos de que se trate y a restablecer el correcto procedimiento de acceso a la información, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de tales hechos

TERCERA.- Compromisos de las partes.

Para el efectivo funcionamiento del Punto Neutro Judicial con los objetivos descritos en este Convenio las partes firmantes de este Convenio asumen los siguientes compromisos:

1. Por parte del Consejo General del Poder Judicial:

- a) Permitir el acceso a los servicios electrónicos y redes de comunicaciones de las Administraciones y Organismos adheridos a la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial;
- b) Gestionar el control de acceso de los usuarios de los órganos judiciales y de las fiscalías que utilicen la plataforma del Punto Neutro Judicial;
- c) Realizar las correspondientes auditorías para verificar la correcta utilización del Punto Neutro Judicial, en particular en aquellos supuestos en que existan indicios de que se está utilizando de forma irregular;
- d) Establecer los protocolos de procedimiento relativos a la tramitación interna de las peticiones de Juzgados y Tribunales y Fiscalías. En todo caso, las peticiones de información se realizarán por aquellos usuarios que previamente hayan sido autorizados por el Letrado de la Administración de Justicia, en el ámbito de los juzgados y tribunales, por el Secretario Relator o quien corresponda en el ámbito de la jurisdicción militar, y por el órgano competente para tal fin en el ámbito del Ministerio Fiscal;
- e) Mantener la información relativa a los accesos y a los controles efectuados durante un plazo no inferior a tres años;
- f) Desarrollar los sistemas informáticos necesarios para el adecuado cumplimiento de este Convenio;
- g) Interesar de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que adopten las medidas precisas para el adecuado cumplimiento del Convenio.

2. Por parte del Ministerio de Justicia:

- a) Dictar las instrucciones de servicio precisas al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia para la plena efectividad de lo acordado en el presente Convenio;
- b) Ejercer las facultades estatutarias con respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia en los términos establecidos legal y reglamentariamente con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del presente convenio;
- c) No incorporar los datos obtenidos a través de los sistemas de consulta del Punto Neutro Judicial a bases de datos o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas ajenas a su función, y ello, aunque se exprese la procedencia de la información;

d) Comunicar al Consejo General del Poder Judicial cualquier incidencia que pueda producirse, así como los posibles cambios en la relación de usuarios

e) Velar por el correcto funcionamiento de las líneas de comunicaciones

f) En el supuesto de que el Ministerio de Justicia desarrolle un sistema de federación de usuarios a efectos de concesión de una clave única a cada funcionario o autoridad de la Administración de Justicia dependiente de dicho Ministerio, la autorización de acceso de los referidos funcionarios y autoridades se realizará empleando los datos de usuario y contraseña incluidos en el citado sistema, que se obtendrán a través de la conexión entre la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial y la Nueva Red Judicial.

### 3. Por parte del Ministerio de Defensa:

a) Facilitar al Consejo General del Poder Judicial la relación inicial de los usuarios de los órganos judiciales de la jurisdicción militar que deban conectarse a la aplicación de consultas servida a través del Punto Neutro Judicial;

b) Comunicar a los usuarios autorizados sus datos de conexión y las condiciones en que se debe de realizar la misma. Deberá incluirse entre ellas, expresamente que los órganos judiciales militares sólo formulen peticiones de información en el ámbito del presente Convenio cuando su interés en la obtención de las mismas se realice en ejercicio de su función jurisdiccional. Una copia de la información obtenida podrá incorporarse a los correspondientes procedimientos judiciales, con independencia del formato de los mismos. Los datos obtenidos de esta forma sólo podrán ser utilizados por los órganos judiciales castrenses para los fines que les son propios;

c) Comunicar al Consejo General del Poder Judicial cualquier incidencia que pueda producirse, así como los posibles cambios en la relación de usuarios;

d) Velar por el correcto funcionamiento de las líneas de comunicaciones;

e) No incorporar los datos obtenidos a través de los sistemas de consulta del Punto Neutro Judicial a bases de datos o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas ajenas a su función, y ello aunque se exprese la procedencia de la información.

### 4. Por parte de la Fiscalía General del Estado:

- a) Facilitar al Consejo General del Poder Judicial los datos de los usuarios autorizados a utilizar la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial;
- b) Comunicar al Consejo General del Poder Judicial cualquier incidencia que pueda producirse, así como los posibles cambios en la relación de usuarios;
- c) Velar por el correcto funcionamiento de las líneas de comunicaciones;
- d) Los órganos del Ministerio Fiscal sólo formularán peticiones de información cuando su interés en la obtención de las mismas se realice en el ejercicio de sus funciones, previa resolución que se haya adoptado al respecto. Una copia impresa de la información obtenida podrá incorporarse a los correspondientes expedientes de la Fiscalía;
- e) No incorporar los datos obtenidos a través de los sistemas de consulta del Punto Neutro Judicial a bases de datos o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas ajenas a su función, y ello aunque se exprese la procedencia de la información.

CUARTA.- Vinculación a los Convenios firmados con Administraciones y Organismos.

Sin perjuicio de lo referido en los apartados anteriores, deberá cumplirse con lo contemplado en cada uno de los Convenios firmados o que se vayan a firmar con las entidades que facilitan el acceso a sus bases de datos, puesto que estos Convenios recogen de forma más detallada cuestiones sobre el acceso a las mismas, así como lo referente a la seguridad de la información. Además, este Convenio, puesto que recoge en su cláusula segunda el procedimiento para solicitar la información de las Administraciones y Organismos que se hayan adherido al Punto Neutro Judicial, así como las obligaciones que recaen en los usuarios peticionarios, se incorporará como anexo a cada uno de los Convenios específicos firmados o que se firmen en un futuro con las citadas Administraciones y Organismos. Previamente a dicha incorporación, será facilitado el presente Convenio a las citadas Administraciones y Organismos a los efectos de su oportuno conocimiento. Por su parte, una vez que se hayan firmado los Convenios correspondientes con las Administraciones y Organismos anteriormente mencionados, se procederá a su incorporación al presente Convenio como Anexos al mismo.

QUINTA.- Financiación.

El presente Convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes, las cuales asumirán los costes de las actuaciones que, en su caso, deban realizar.

#### SEXTA.- Protección de datos.

Cuando la solicitud de información afecte a datos personales en el ámbito de los Juzgados y Tribunales el tratamiento de éstos se realizará para fines jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto al respecto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando la consulta, extracción y utilización de datos personales se efectúe por el Ministerio Fiscal, el tratamiento de los mismos se llevará a cabo para fines jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal y, en la LOPJ.

Asimismo, el tratamiento de estos datos personales para fines jurisdiccionales por los correspondientes responsables de tratamiento se ajustará también a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

En este sentido, y en relación con lo referido en el párrafo anterior, ostentarán la condición de responsables del tratamiento de datos personales derivados del acceso a la información a través del Punto Neutro Judicial:

- a) El órgano jurisdiccional ante el que se tramiten los procesos que den lugar a este acceso;
- b) En la jurisdicción militar, al igual que en el supuesto anterior, cada uno de los órganos jurisdiccionales que tramiten los procesos que den lugar también al citado acceso;
- c) El Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción FGE 2/2019.
- d) La oficina judicial y fiscal en el ejercicio de su actividad de gestión.

En el ámbito de la jurisdicción penal el tratamiento de datos personales se ajustará a lo regulado en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.



Las partes se asegurarán de advertir a los usuarios autorizados que el uso indebido de los datos a los cuales hayan accedido comportará, en su caso, las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, sin perjuicio de la actuación de la autoridad de control en materia de protección de datos competente.

#### SÉPTIMA. – Confidencialidad.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de publicidad que correspondan a las partes de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

#### OCTAVA. - Comisión Mixta de Seguimiento.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá al Consejo General del Poder Judicial, al ser la entidad que gestiona el Punto Neutro Judicial.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

- a) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente Convenio.
- b) Realizar el seguimiento de las actuaciones y los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.
- c) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.

d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.

e) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

#### NOVENA. - Vigencia y eficacia del Convenio.

El presente convenio producirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cuatro años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.

#### DÉCIMA. - Modificación del Convenio.

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas partes que el presente Convenio.

#### UNDÉCIMA. - Extinción del Convenio.

El presente convenio se extingue, por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el

convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en las leyes.

#### DUODÉCIMA.- Naturaleza del Convenio y Régimen Jurídico.

Este convenio tiene naturaleza jurídico-pública.

Las cuestiones a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio se resolverán de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la cláusula octava de este Convenio, sin perjuicio en su caso de la competencia de la jurisdicción contencioso – administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente el presente Convenio.

El Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Benito y Benítez de Lugo

El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo

La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

## ANEXO II

### ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL REINO DE ESPAÑA Y LA FISCALÍA EUROPEA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL REUNIDOS

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La Fiscal General Europea, Excmo. Sra. Laura Codruța Kövesi, en nombre y representación de la Fiscalía Europea, por Decisión UE 2019/1798 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Se reconocen con capacidad y legitimación bastante en derecho para celebrar y firmar el presente Acuerdo de Colaboración, y en su virtud,

#### EXPONEN

Primero.

Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y gobierno del Poder Judicial.

Segundo.

Que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 20 de febrero de 2002, autorizó la constitución del «Punto Neutro Judicial», como una red de comunicaciones que soporta una plataforma de servicios que permite consultar e interconectar a los órganos judiciales con terceras

entidades como Administraciones públicas, Colegios Profesionales, Entidades Financieras o Registros, al objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos ofreciendo para ello herramientas y servicios a los colectivos que conforman la justicia, para que puedan ser más eficientes y eficaces en la tramitación de los asuntos judiciales.

Los objetivos principales del Punto Neutro Judicial son servir de apoyo a la gestión de los órganos judiciales, proporcionar servicios de ayuda al juez/a, automatizar la gestión de los órganos de gobierno y facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre los servicios informáticos al servicio de la Administración de Justicia.

Tercero.

Que para permitir esta conexión con las entidades referidas anteriormente se han firmado con todos ellos Convenios de Colaboración, que regulan la forma y utilización del acceso a las bases de datos que sean necesarias consultar durante el procedimiento judicial que se esté sustanciando. En todo caso, la consulta se realizará previa resolución que lo autorice.

Respecto al catálogo de servicios convenidos a los que se puede acceder, cabe señalar, entre otros, las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico, Bancos y Cajas de Ahorro.

Cuarto.

Que el Punto Neutro Judicial, al facilitar que las comunicaciones se realicen de forma electrónica, contribuye a hacer efectivo el mandato del artículo 230.1 de la LOPJ, en virtud del cual, los Juzgados y Tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen el capítulo I bis del título III de la LOPJ, así como la normativa de protección de datos.

Además, también permite el cumplimiento de lo establecido por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que exige la interoperabilidad de los programas y servicios utilizados en el ámbito judicial.

Quinto.

Que la Fiscalía Europea, conforme al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre de 2017, es un órgano de la Unión Europea responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 y determinados por ese Reglamento así como ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de éstos.

Sexto.

Que las partes consideran adecuado suscribir un Acuerdo de Colaboración que permita a la Fiscalía Europea la utilización de la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial, en el ejercicio de sus correspondientes competencias, que se registrará por las siguientes:

## CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Acuerdo de Colaboración.

Este Acuerdo de Colaboración tiene por objeto establecer el marco de colaboración a desarrollar entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Europea para la utilización de la plataforma de servicios de Punto Neutro Judicial como medio electrónico para la obtención, por parte de la Fiscalía Europea en España cuando ejerza funciones respecto de las que la Ley lo autorice, de información obrante en las bases de datos de aquellas Administraciones y Organismos que, a su vez, hayan convenido con el Consejo General del Poder Judicial facilitar este acceso a través del citado Punto Neutro Judicial.

Todo ello, sin perjuicio de los intercambios de información que, en determinados casos, distintos de los regulados en este Acuerdo, puedan contemplarse en el ordenamiento jurídico.

Segunda. Procedimiento de acceso a la información.

La utilización del Punto Neutro Judicial con la finalidad de acceder a la información disponible en las bases de datos de las Administraciones y Organismos con los que se haya establecido convenio de colaboración se ajustará a las siguientes reglas:

a) La petición de acceso a la información requerirá la existencia de una previa resolución procesal que autorice esta solicitud en el marco de los correspondientes procedimientos previstos en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 12 de



octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

b) Cuando afecte a datos de carácter personal, la comunicación se realizará de conformidad con la cláusula sexta de este Acuerdo de Colaboración.

c) Con carácter general, la comunicación de la información se llevará a cabo de forma automatizada a solicitud de persona autorizada, sin perjuicio de que, en la configuración del Punto Neutro Judicial, atendiendo a las peculiaridades de diferentes Administraciones u Organismos, se habilite la posibilidad de que la respuesta obtenida no se realice de manera automatizada.

d) La obtención de información se llevará a cabo a través de la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial gestionado por el Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de que, en un futuro, puedan utilizarse otros sistemas o redes de comunicaciones que resulten más eficaces, previa aprobación por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

e) En caso de que se detecten incumplimientos de las obligaciones de los usuarios o accesos irregulares o no autorizados, se iniciarán las oportunas comprobaciones tendentes a constatar las circunstancias en las que se hayan producido los hechos de que se trate y a restablecer el correcto procedimiento de acceso a la información, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de tales hechos. La Fiscalía Europea será informada del resultado de tales comprobaciones.

Tercera. Compromisos de las partes.

Para el efectivo funcionamiento del Punto Neutro Judicial con los objetivos descritos en este Acuerdo de Colaboración las partes firmantes de este Acuerdo de Colaboración asumen los siguientes compromisos:

1. Por parte del Consejo General del Poder Judicial:

a) Permitir el acceso a los servicios electrónicos y redes de comunicaciones de las Administraciones y Organismos adheridos a la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial;

b) Gestionar el control de acceso de los usuarios de los órganos judiciales y de las fiscalías que utilicen la plataforma del Punto Neutro Judicial;

c) Realizar las correspondientes auditorías para verificar la correcta utilización del Punto Neutro Judicial, en particular en aquellos supuestos en que existan indicios de que se está utilizando de forma irregular. La Fiscalía Europea será informada de las auditorías que se lleven a cabo y de su resultado;

d) Establecer los protocolos de procedimiento relativos a la tramitación interna de las peticiones de la Fiscalía Europea. En todo caso, la realización de peticiones de información se realizará por aquellos usuarios que previamente hayan sido autorizados por el Fiscal Europeo;

e) Mantener la información relativa a los accesos y a los controles efectuados durante un plazo no inferior a tres años y, previa solicitud, cuando esa información se refiera al acceso de la Fiscalía Europea y a los controles realizados en relación con el acceso de la Fiscalía Europea, proporcionarla a esta última;

f) Desarrollar los sistemas informáticos necesarios para el adecuado cumplimiento de este Acuerdo de Colaboración;

g) Interesar de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que adopten las medidas precisas para el adecuado cumplimiento del Acuerdo de Colaboración.

## 2. Por parte de la Fiscalía Europea:

a) Facilitar al Consejo General del Poder Judicial los datos de los usuarios autorizados a utilizar la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial;

b) Comunicar al Consejo General del Poder Judicial cualquier incidencia que pueda producirse, así como los posibles cambios en la relación de usuarios;

c) Velar por el correcto funcionamiento de las líneas de comunicaciones;

d) Los/as Fiscales Europeos Delegados sólo formularán peticiones de información cuando su interés en la obtención de las mismas se realice en el ejercicio de sus funciones, previa resolución que se haya adoptado al respecto. Una copia impresa de la información obtenida podrá incorporarse a los correspondientes procedimientos de la Fiscalía Europea;

e) No incorporar los datos obtenidos a través de los sistemas de consulta del Punto Neutro Judicial a bases de datos o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas ajenas a su función, y ello, aunque se exprese la procedencia de la información.

Cuarta. Vinculación a los Convenios firmados con Administraciones y Organismos.

Sin perjuicio de lo referido en los apartados anteriores, deberá cumplirse con lo contemplado en cada uno de los Convenios firmados con las entidades que facilitan el acceso a sus bases de datos, puesto que estos Convenios recogen de forma más detallada cuestiones sobre el acceso a las mismas, así como lo referente a la seguridad de la información en lo que le resulte aplicable conforme a la legislación por la que se rige la Fiscalía Europea.

Además, este Acuerdo de Colaboración, puesto que recoge el procedimiento para solicitar la información de las Administraciones y Organismos que se hayan adherido al Punto Neutro Judicial, así como las obligaciones que recaen en los usuarios peticionarios, se incorpora como anexo a cada uno de los Convenios específicos firmados o que se firmen en un futuro con las citadas Administraciones y Organismos. Previamente a dicha incorporación, será facilitado a las citadas Administraciones y Organismos a los efectos de su oportuno conocimiento.

Por su parte, una vez que se hayan firmado los Convenios correspondientes con los anteriormente mencionados, se procederá a su incorporación a este Acuerdo de Colaboración como Anexos al mismo.

Quinta. Financiación.

El presente Acuerdo de Colaboración no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes.

Sexta. Protección de datos.

Los datos personales recibidos por la Fiscalía Europea como resultado de las consultas que se realicen en el Punto Neutro Judicial serán tratados por la Fiscalía Europea de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

En este sentido, y en relación con lo referido en los párrafos anteriores, la Fiscalía Europea ostentará la condición de responsable independiente del

tratamiento de datos personales derivados del acceso a la información a través del Punto Neutro Judicial.

Otros datos personales intercambiados en virtud de este acuerdo, o necesarios para aplicar el acuerdo, como, por ejemplo, los nombres de los usuarios, se procesarán de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de las Partes.

Las partes se asegurarán de advertir a los usuarios autorizados que el uso indebido de los datos a los cuales hayan accedido comportará, en su caso, las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, sin perjuicio de la actuación de la autoridad de control en materia de protección de datos competente.

#### Séptima. Confidencialidad.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Acuerdo de Colaboración. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Acuerdo de Colaboración.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Acuerdo de Colaboración, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de publicidad que correspondan a las partes de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de ellas.

#### Octava. Comisión Mixta de Seguimiento.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Acuerdo de Colaboración, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá al Consejo General del Poder Judicial, al ser la entidad que gestiona el Punto Neutro Judicial.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

- a) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente Acuerdo de Colaboración.
- b) Realizar el seguimiento de las actuaciones y los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente Acuerdo de Colaboración.
- c) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
- d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Acuerdo de Colaboración.
- e) Interpretar el Acuerdo de Colaboración y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Novena. Vigencia y eficacia del Acuerdo de Colaboración.

Este Acuerdo de Colaboración resultará eficaz en la fecha en que ambas Partes se hayan notificado, mediante el canje de notas, que han cumplido con los requisitos de sus respectivas legislaciones y mantendrá su vigencia por un período de cuatro años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del Acuerdo de Colaboración podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.

Décima. Modificación del Acuerdo de Colaboración.

El presente Acuerdo de Colaboración podrá ser modificado por mutuo acuerdo a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas partes que el presente Convenio.

Undécima. Extinción del Acuerdo de Colaboración.

El presente Acuerdo de Colaboración se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del Acuerdo de Colaboración sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento y control de la ejecución del Acuerdo de Colaboración.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Acuerdo de Colaboración. La resolución del Acuerdo de Colaboración por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Acuerdo de Colaboración.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en las leyes.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Acuerdo de Colaboración en dos ejemplares originales, cada uno en las lenguas española e inglesa, siendo ambas versiones igualmente válidas.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,  
La Fiscal General Europea,  
Carlos Lesmes Serrano,



---

En Madrid, a 2 de febrero de 2022

Laura Codruța Kövesi,

En Luxemburgo, a 2 de febrero de 2022

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 16 de febrero de 2022, fecha de la última de las comunicaciones con que las Partes se informaron del cumplimiento de sus requisitos internos, según se establece en la cláusula novena.

Madrid, 21 de febrero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.